

4° TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO.

ACUSADO: CLAUDIO ENRIQUE PONCE PALOMINOS

Rol Único: 2300637190-6

Rol Interno Tribunal: 26-2025

Santiago, siete de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS, OÍDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, esta Sala del Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago, constituida por el Juez Presidente Cristian Soto Galdames e integrada por los jueces Pedro Aravena Bouyer y Antonia Godoy Medina, se llevó a efecto la audiencia del juicio oral de la causa rol interno del tribunal N°**26-2025**, seguida en contra del acusado **CLAUDIO ENRIQUE PONCE PALOMINOS**, chileno, cédula de identidad N° 10.577.130-4 con domicilio de calle Leonor de la Corte N° 5363 comuna de Quinta Normal, quien estuvo representado en la audiencia de juicio por los abogados defensores privados **Aníbal Griño Huidobro y Diego Vallejos Parra**.

El Ministerio Público, estuvo representado por el Fiscal don **Francisco Rojas Rubilar**.

SEGUNDO: Acusación fiscal.

HECHOS:

El día 31 de agosto de 2023 a las 13:00 horas aproximadamente, en el domicilio ubicado en calle Leonor de la Corte N°5363, comuna de Quinta Normal el imputado CLAUDIO ENRIQUE PONCE PALOMINOS fue sorprendido por personal policial que se encontraba diligenciando una orden de entrada y registro autorizada por el magistrado Nibaldo Arévalo Macias de fecha 22 de agosto de 2023, manteniendo en su poder, con ánimo de traficar y sin tener autorización para su tenencia de las siguientes evidencias:

- 02 Bolsas de nylon transparente contenedoras de Marihuana, con un peso de 19 Gramos.
- 01 Bolsa de nylon transparente contenedora de Clorhidrato de Cocaína, con un peso de 49 Gramos
- 01 Bolsa de nylon transparente con 46 envoltorios de papel blanco contenedores de Clorhidrato de Cocaína con un peso de 63 Gramos

- 01 Bolsa de nylon transparente con 420 envoltorios de papel blanco cuadriculado contenedores de Pasta Base de Cocaína, con un peso de 112 Gramos
- 88 Bolsas de nylon transparente contenedoras de Pasta Base de Cocaína en estado sólido con un peso de 70 Gramos
- 05 Plantas del género Cannabis Sativa de 70 cm la más alta y 60 cm la más pequeña.
- 01 Bolsa de nylon transparente contenedora de Clorhidrato de Cocaína, con un peso de 425 Gramos
- Material de dosificación consistente en 2 pesas digitales
- Dinero en efectivo por la suma de \$663.000.
- 01 Arma a fuego adaptada para el disparo marca Kuzey, modelo F92, serial P20-0929, con su cargador puesto en la recámara con 08 cartuchos marca Geco, calibre 9 mm, sin percutir. 08 Cartuchos balísticos de diferentes marcas calibre 9 mm, sin percutir.

CALIFICACIÓN JURÍDICA:

Los hechos así descritos configuran los delitos de tráfico ilícito de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas descrito y sancionado en el artículo 3° de la Ley 20.000, en relación con el artículo 1 del mismo cuerpo legal; cultivo de especies de género cannabis del artículo 8 de Ley 20.000, además de los delitos de tenencia de arma de fuego prohibida y tenencia de municiones, previsto y sancionado en el artículo 13 letra c) y 9 de la Ley 17.798, respectivamente

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD PENAL:

A juicio del Ministerio Público no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal

PENA SOLICITADA:

Siete años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 50 UTM, accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, el comiso de los instrumentos y efectos del delito, con costas, por su participación en el delito de tráfico ilícito de drogas; la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, el comiso de los instrumentos y efectos del delito, con costas, por su participación en el

delito de cultivo de especies de género cannabis; la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales del artículo 28 del Código Penal, el comiso de los instrumentos y efectos del delito, con costas, por su participación en el delito de tenencia de arma de fuego prohibida; y la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, accesorias legales del artículo 30 del Código Penal, el comiso de los instrumentos y efectos del delito, con costas.

TERCERO: Alegatos de apertura y clausura.

1.- Del Ministerio Público.

En su alegato de apertura, el Ministerio Público, se refirió a la prueba que rendiría, en base a la cual se establecerían los hechos y la participación del acusado en los hechos e ilícitos descritos en la acusación.

En la clausura, pidió la condena del imputado refiriéndose a la prueba rendida, en base a la cual considera se han acreditado los hechos y participación del acusado.

En relación con la calificación jurídica del delito de la ley 20.000, considera que se trata de un tráfico del artículo 3, atendida la cantidad de drogas y ello en relación con el bien jurídico que se intenta proteger (la difusión descontrolada de cantidades de droga en diversos consumidores) y el mayor riesgo de lesividad de este en atención a las cantidades de drogas encontradas.

Respecto del cultivo de cinco plantas de marihuana, hace una modificación de la calificación jurídica y lo subsume al consumo próximo e inmediato en el tiempo a lo que eventualmente estarían destinadas.

En cuanto al arma de fuego, según los dichos del perito del LABOCAR, estaba modificada y apta para el disparo y los 16 cartuchos también aptos para su percusión, el imputado reconoció haberla escondido con droga y pesas digitales, lo que demuestra que tenía disposición sobre el arma y la cartuchería en cuestión. Dejó a criterio del tribunal subsumir las cantidades de cartuchería encontradas en la utilización del arma.

Volviendo al delito de drogas, dijo que la tenencia de arma y cartuchería idónea para ser utilizada es también un elemento anexo que debe ser considerado para efectos de la configuración del delito de tráfico, el que suele ir

acompañado, del manejo de celulares, dinero, armas de fuego para proteger el negocio.

Replicando a la defensa, dijo que en la acusación se planteó la posesión de la droga.

2.- De la Defensa.

La defensa en su apertura indicó que adoptaría una teoría colaborativa, anunciando que su representado iba a renunciar a guardar silencio y relataría todas las actividades desplegadas antes, al momento y en los momentos posteriores a su detención. Agregó que el imputado ya había declarado con anterioridad ante el Ministerio Público y que hubo tratativas para un procedimiento abreviado que no prosperó por no haberse obtenido a tiempo la autorización respectiva de la fiscalía regional.

Sin desmedro de eso y de la teoría colaborativa, al final de la audiencia de juicio en el alegato de clausura, formularía alegaciones respecto a calificaciones jurídicas y subsunción de unos delitos en otros.

En la clausura, la misma defensa, respecto de la tenencia de arma y municiones pide que se subsuman en un solo delito, de porte ilegal de arma. Al menos en la materialidad propia del arma tenemos un arma calibre 9 milímetros, y las municiones encontradas que son de 9 milímetros. En este sentido, claramente lo que sanciona la ley de armas y sobre todo con el porte ilegal de armas y la prevención que se establece sobre eso es que esas armas eventualmente puedan disparar. Y para disparar claramente necesitan municiones. Entendiendo así la defensa, que las municiones son parte - cuando son del mismo calibre- de un elemento base del delito de porte ilegal de armas. Entonces, al respecto de los delitos ley de armas, solicita la subsunción y que se castigue a su representado por un solo delito, el porte ilegal de arma.

Respecto del delito de la ley de drogas, plantea que debe ser calificado como de microtráfico, ya que la ley no distingue cantidades se deben evaluar los antecedentes allegados al juicio más allá de la cantidad de droga. Aquí la droga estaba destinada a llegar al consumidor final. Tiene que haber una diferencia entre las personas que le entregan la droga a su representado y las personas que en definitiva venden esta droga en pequeñas cantidades. El consumidor final se llevaba cantidades que van entre los 0,27 y 1,37 gramos. El

verbo rector es venta, la que se desarrolla en pequeñas cantidades y por montos de dinero bajos.

Respecto del cultivo no hay antecedente para considerar que el acusado está mintiendo, entonces son para el consumo, falta del artículo 50, en subsidio subsunción al tráfico.

Duplicando, dijo que la posesión tiene una finalidad que es la venta que se realizaba en pequeñas cantidades.

CUARTO: Declaración y últimas palabras del acusado.

Previamente advertido de sus derechos, en especial de su derecho a guardar silencio, el acusado prestó declaración diciendo que el estaba con dos vecinos en la casa, cuando llegó su vecina Marisol desesperada diciendo que su marido iba a matarla, quien le entregó una bolsa con ropa y una pistola adentro y él se la guardó. Él sabía que estaba cometiendo un delito, no se fijó si la pistola tenía municiones, la bolsa la puso en un bolso donde él tenía sus cosas, pesa y drogas. La droga la compraba en Francisco Errázuriz 748, segundo piso a Darío y Jaime, la compraba cada dos semanas, compraba unos 150.000 y 200.000 aproximadamente cada vez, en droga, 100 gramos o un poco más. Compraba la droga y la paqueteaba en paquetitos de 0,5 gramos. Le incautaron pasta base y cocaína los que vendía en \$1.000 y los de coca en 3 por 5.000 y uno a \$2.000. Llevaba seis meses vendiendo droga en la esquina de la casa. Él le informó al Ministerio Público donde compraba la droga, desde un principio colaboró. El intentó cooperar, no sabe si el Ministerio Público hizo algo con esa información.

Consultado por el Ministerio Público, respondió que él recibió el arma en su casa en presencia de dos vecinos, que él guardó el arma para esconderla de los nietos en un horno de barro. En el bolso había drogas, pesas y el arma. En su casa había plantas de marihuana que él plantó para fumarla porque él era alcohólico y con eso controlaba la ansiedad y fue parando.

Finalmente, el acusado no ejerció su derecho a decir palabras finales.

QUINTO: Prueba del Ministerio Público.

A fin de acreditar los hechos contenidos en la acusación fiscal y la participación del acusado en ellos, el Ministerio Público incorporó durante la audiencia de juicio oral, los siguientes medios de prueba:

Testimonial, se contó con la declaración de los siguientes testigos:

1.- ADOLFO HERNAN NIETO FUENTES, teniente de Carabineros de Chile, domiciliado para estos efectos en Avenida Santa Isabel N° 1156, comuna Providencia.

2.- CRISTIAN MORA ARAUCO, Cabo 2° de Carabineros de Chile, domiciliado para estos efectos en Avenida Santa Isabel N° 1156, Providencia.

Prueba Pericial:

Don **JOSÉ INOSTROZA RAMIREZ**, Sargento 1° del Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile (LABOCAR), domiciliado para estos efectos en Maule N° 40, comuna Santiago, quien declaró en su calidad de perito armero respecto a Informe Pericial Balístico N° 6642-2023 de fecha 26-09-2023, de LABOCAR.

Prueba documental:

1.- Oficio 6442/6810017/2024 de 04 de marzo de 2024 de la Dirección General de Movilización, respecto del acusado, el que señala que no tiene permiso para porte ni transporte de armas ni municiones.

2.- Acta de recepción N° 566-2023 del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, la que da cuenta de haberse recibido en dicha repartición las evidencias incautadas bajo NUE 6628294, 6628253 y 6628249, correspondientes a 77,7 gramos brutos (76,4 netos), 17,8 gramos brutos (16,4 netos) y 254 gramos brutos y netos de hierba color verde seca las dos primeras y cinco plantas con tallo y raíz de 60 y 70 centímetros de altura, color verde húmeda, la tercera.

3.- Acta de recepción N° 6457-2023 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, la que da cuenta de haberse recibido en dicha repartición, entre otras, las evidencias incautadas correspondientes a cocaína, bajo NUE N°6628251 (con 80.8 gramos de polvo blanco y 19,5 gramos netos de polvo beige) N°6628252 (con 54.8 gramos netos de trozos beige) y N° 6628240 con 424,2 gramos brutos de polvo blanco).

4.- Reservado N° 18865-2023 del Instituto de Salud Pública y sus respectivos protocolos de análisis químico e informe de efectos y peligrosidad del clorhidrato de cocaína y cocaína base, que da cuenta del análisis y los resultados efectuados a las sustancias correspondientes a los NUE, 6628251 (cocaína base al 66% y cocaína clorhidrato al 12%, 6628252 (cocaína base al

79%), 6628240 (cocaína clorhidrato al 25%); suscritos por el perito Paula Fuentes Azocar.

IV.- Otros medios de prueba:

Un set fotográfico de ocho fotografías que dan cuenta del sitio del suceso, especies, sustancias, dinero y armamento incautados, y vestimentas del imputados en el inmueble de calle Leonor de la Corte 5363, reconocidas como tales por el testigo Cristian Mora Arauco.

SEXTO: Prueba de la defensa.

La defensa, sólo compartió la prueba del Ministerio Público.

SÉPTIMO: Hechos de la acusación acreditados.

En base a la prueba presentada por el Ministerio Público, se considera que el órgano persecutor ha logrado acreditar, de acuerdo con el estándar exigido por la ley en el artículo 340 del mismo Código Procesal Penal, esto es, más allá de toda duda razonable, ha sido posible establecer la existencia de los siguientes hechos descritos en la acusación fiscal:

El día 31 de agosto de 2023 a las 13:00 horas aproximadamente, en el domicilio ubicado en calle Leonor de la Corte N°5363, comuna de Quinta Normal el imputado CLAUDIO ENRIQUE PONCE PALOMINOS fue sorprendido por personal policial que se encontraba diligenciando una orden de entrada y registro autorizada judicialmente, manteniendo en su poder, con ánimo de traficar y sin tener autorización para su tenencia de las siguientes sustancias, elementos, dinero y armamentos:

- 80,8 gramos netos y 424, 2 brutos de Clorhidrato de Cocaína.
- 19,5 gramos netos de polvo beige correspondiente a cocaína base.
- 54,8 gramos netos de trozos beige, correspondiente a cocaína base.
- Material de dosificación consistente en 2 pesas digitales.
- Dinero en efectivo por la suma de \$663.000.
- 01 Arma a fuego adaptada para el disparo marca Kuzey, modelo F92, serial P20-0929, con su cargador puesto en la recámara con 08 cartuchos marca Geco, calibre 9 mm, sin percutir.
- 08 Cartuchos balísticos de diferentes marcas calibre 9 mm, sin percutir.

Además, para su consumo personal y próximo en el tiempo, mantenía en 17,8 gramos brutos de yerba seca de marihuana (16,4 netos) y cinco plantas del género Cannabis Sativa de 70 cm la más alta y 60 cm la más pequeña.

OCTAVO: Ponderación de la prueba.

Los hechos establecidos en el motivo precedente son los únicos que encuentran su sustento en los diversos elementos de convicción incorporados al juicio, los que han sido ponderados de acuerdo artículo 297 del Código Procesal Penal.

Los funcionarios policiales que prestaron declaración en juicio, Adolfo Nieto y Cristian Mora, estuvieron contestes en que el día 31 de agosto de 2023 participaron en una diligencia de entrada y registro que había sido autorizada judicialmente en el domicilio de calle Leonor de la Corte N° 5363 de Quinta Normal, lugar donde detuvieron al acusado Claudio Enrique Ponce Palominos, luego de haber encontrado en diversos lugares de distintas dependencias las sustancias ilícitas, elementos, dinero y armamento referido en los hechos de la acusación que se han tenido por acreditados en el motivo precedente.

El hallazgo de 80,8 gramos netos y 424, 2 brutos de Clorhidrato de Cocaína, 19,5 gramos netos de polvo beige correspondiente a cocaína base, 54,8 gramos netos de trozos beige, correspondiente a cocaína base, material de dosificación consistente en 2 pesas digitales, dinero en efectivo por la suma de \$663.000, un arma a fuego adaptada para el disparo marca Kuzey, modelo F92, serial P20-0929, con su cargador puesto en la recámara con 08 cartuchos marca Geco, calibre 9 mm, sin percutir y de 08 Cartuchos balísticos de diferentes marcas calibre 9 mm, sin percutir, resultó corroborado con el mérito de las fotografías contenidas en el set fotográfico de los otros medios de prueba, que las muestran en los lugares indicados y que fueron reconocidas como tales por el testigo Cristian Mora.

Así también, la cantidad y naturaleza de las sustancias ilícitas incautadas, consta en la prueba documental signada con los números 2, 3 y 4, esto es, 2.- Acta de recepción N° 566-2023 del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, la que da cuenta de haberse recibido en dicha repartición las evidencias incautadas bajo NUE 6628294, 6628253 y 6628249, correspondientes a 77,7 gramos brutos (76,4 netos), 17,8 gramos brutos (16,4 netos) y 254 gramos brutos y netos de hierba color verde seca las dos primeras

y cinco plantas con tallo y raíz de 60 y 70 centímetros de altura, color verde húmeda, la tercera; **3.-** Acta de recepción N° 6457-2023 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, la que da cuenta de haberse recibido en dicha repartición, entre otras, las evidencias incautadas correspondientes a cocaína, bajo NUE N°6628251 (con 80.8 gramos de polvo blanco y 19,5 gramos netos de polvo beige) N°6628252 (con 54.8 gramos netos de trozos beige) y N° 6628240 con 424,2 gramos brutos de polvo blanco); y, **4.-** Reservado N° 18865-2023 del Instituto de Salud Pública y sus respectivos protocolos de análisis químico e informe de efectos y peligrosidad del clorhidrato de cocaína y cocaína base, que da cuenta del análisis y los resultados efectuados a las sustancias correspondientes a los NUE, 6628251 (cocaína base al 66% y cocaína clorhidrato al 12%, 6628252 (cocaína base al 79%), 6628240 (cocaína clorhidrato al 25%); suscritos por el perito Paula Fuentes Azocar.

No se rindió prueba idónea destinada a establecer que la tenencia de cannabis haya sido también con el ánimo de traficar (las ventas observadas solo fueron respecto de otras sustancias) y, por el contrario, el imputado declaró ser consumidor de marihuana, explicando las razones por las que consumía (para controlar su alcoholismo), de modo tal que se puede inferir que tanto la sustancia vegetal seca como las plantas, estaban destinadas a su consumo personal. La tenencia de marihuana, que no constituye cultivo, al haberse encontrado en un lugar privado y fuera de las hipótesis del artículo 50 no constituye un delito, por lo que no será considerada esa sustancia en la condena por tráfico a que nos referiremos más adelante.

De otro lado, el hecho de no haber tenido el acusado Ponce Palominos autorización para la tenencia de arma y municiones, aparece en el documento N° 1, esto es, en el Oficio N° 6442/681001772024 de 4 de marzo de 2024 de la Dirección General de Movilización.

La circunstancia de tratarse de un arma y cartuchos a elementos modificados y de encontrarse aptos para ser disparados, se logró establecer en base a la declaración del perito José Inostroza Garrido, quien dio cuenta de las pericias que había realizado y de sus conclusiones, sosteniendo que confeccionó el informe pericial balístico número 6642-2023, de fecha 26/09/2023, respecto de las evidencias remitidas, indicando que en la evidencia número 1, NUE 6628-248, contenía una pistola de fogeo modificada marca

Kuzey, modelo F92 junto a su respectivo cargador calibre 9mm fogueo; tres cartuchos balísticos modificados calibre .380 auto y 13 cartuchos de fogueo modificados calibre 9 milímetros; todos los cuales fueron sometidos a las pruebas de disparo, aptitud, estado de conservación y funcionamiento mecánico, teniendo una correcta activación, encontrándose tanto el arma como los cartuchos aptos para el disparo y para ser utilizados.

NOVENO. Calificación jurídica.

Los hechos que se han tenido por acreditados, configuran los delitos de tráfico ilícito de drogas del artículo 3 en relación el 1 de la ley 20.000, cultivo destinado al consumo del género cannabis sativa del artículo 8 inciso primero parte final de la misma ley 20.000 y el de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida (en que se subsume la tenencia de municiones), previsto y sancionado en el artículo 13 en relación al artículo 3 letra d) ambos de la ley N°17.798; ilícitos que se encuentran en grado de desarrollo consumado.

1.- En cuando al delito de tráfico del artículo 3 de la ley 20.000.

Respecto del delito de tráfico cabe consignar que el inciso segundo del artículo 3 de la ley 20.000 establece que se entenderá que trafican los que, sin contar con la autorización competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten sustancias o materias primas de las señaladas en el artículo 1 de la misma ley.

Tal como se adelantó en el veredicto, a juicio de estos sentenciadores los hechos que se han tenido por acreditados en relación con este ilícito corresponde calificarlos jurídicamente como el delito del artículo 3 y no el de tráfico en pequeñas cantidades del artículo 4 como ha pretendido la defensa, atendiendo a un criterio cuantitativo, ya que las cantidades de drogas que se poseían no eran pequeñas. El mismo defensor en su alegato de clausura entendió lo mismo al referir “Si buen suena hartó...”

Por mucho que las conductas observadas por la policía en forma previa a la entrada y registro que culminó con los hallazgos de droga y la detención del acusado hayan sido la venta en dos oportunidades de un papelillo de cocaína base de 1,200 mg y de dos papelillos de clorhidrato de cocaína con 2,5 mg, y que el funcionario Nieto haya respondido a la defensa que esas son propias del microtráfico, para calificar los hecho como el delito de tráfico del artículo 3, se ha tenido en consideración que, además de haberse encontrado

droga dosificada, se encontró un paquete con tenedor de 424,2 gramos brutos de clorhidrato de cocaína, además de otros envoltorios con 80,8 gramos netos de la misma sustancia, otros 19,5 gramos netos de polvo beige correspondiente a cocaína base y otros 54,8 gramos netos de trozos beige de cocaína base. Lo que hace un total de 505 gramos de clorhidrato y 74,3 de cocaína base, es decir, una cantidad importante de clorhidrato no dosificada, además de otra menor de cocaína base.

El hecho de haberse encontrado más de 400 gramos de clorhidrato de cocaína no dosificada no permite establecer que esa cantidad estaba igualmente destinada a la venta a consumidores finales en cantidades de aproximadamente un gramo, como lo ha pretendido la defensa. Ello también permite descartar que sea efectivo lo que señaló el imputado al prestar declaración e indicar que él compraba droga cada dos semanas en cantidades de 100 gramos o un poco más.

Tampoco es efectivo, como lo sostuvo la defensa, que de los verbos rectores del artículo 3 al acusado se le esté sancionado solo por la venta (la que entiende se desarrollaría solo en pequeñas cantidades), pues tanto en la acusación como en esa sentencia, lo que se está sancionando es la posesión de sustancias ilícitas destinadas al tráfico, y entre lo que poseía el imputado había una cantidad importante de clorhidrato de cocaína a granel (424,2 gramos brutos). Tal como lo sostuvo el fiscal, en este caso, existe un mayor riesgo de lesividad del bien jurídico protegido en atención a las cantidades de drogas encontradas, ya que es justamente la posesión la que permite una difusión descontrolada de droga, a mayor cantidad, mayor es el riesgo de afección al bien jurídico protegido.

A lo anterior, se suma que, junto con la droga a granel, al imputado se le encontró un arma y municiones aptos para ser disparados, tenencia que, tal como lo refiriera el señor fiscal en sus alegaciones de clausura, es también un elemento anexo que debe ser considerado para efectos de la configuración del delito de tráfico, el que suele ir acompañado, del manejo de celulares, dinero y armas de fuego para proteger el negocio.

Así las cosas, los hechos descritos en el considerando anterior, son constitutivos de un delito de tráfico ilícito de estupefacientes, previsto en el artículo 3° en relación con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 20.000, en

grado consumado, cometido por el acusado, por cuanto su respectiva conducta, consistente, en poseer, sin la debida autorización, 80,8 gramos netos más 424, 2 gramos brutos de Clorhidrato de Cocaína, 19,5 gramos netos de polvo beige correspondiente a cocaína base y 54,8 gramos netos de trozos beige de cocaína base, son constitutivas de dicho ilícito, al encontrarse dichas sustancias sujetas al control de la Ley 20.000, cuyo reglamento las califica como sustancias o drogas estupefacientes capaces de producir dependencia física o síquica y graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, todo lo cual constituye una conducta idónea para poner en riesgo el bien jurídico penalmente tutelado consistente en la salud pública, implicando la conducta del acusado no sólo el conocimiento de los elementos de la faz objetiva del tipo penal, sino además, la voluntad de realización manifiesta de llevar a cabo dicho comportamiento, concurriendo, de esta forma, dolo directo, como elemento del tipo subjetivo.

Además, ha de tenerse presente que, tratándose de un delito de mera actividad, el tipo penal se consuma con la sola realización de la conducta típica, de manera que habiéndose demostrado que el imputado mantenía en su poder la droga que fue incautada con motivo de este procedimiento el ilícito se encuentra consumado.

En definitiva, se comprobó más allá de toda duda razonable, que el día en cuestión, el encausado Ponce Palominos fue sorprendido, por personal del OS7 de carabineros, en circunstancias que poseía al interior de su domicilio las referidas sustancias, sin contar con la autorización competente. Además, el hecho de haber estado destinadas esas drogas a su transferencia o distribución a terceros, aparece de manifiesto en los dichos del testigo Nieto, quien dio cuenta de las vigilancias y fiscalizaciones previas a la entrada y registro, logrando visualizar operaciones y características típicas de ventas de drogas e identificando a dos consumidores que habían comprado papelillos de pasta base y clorhidrato de cocaína en ese mismo lugar. Por lo demás, el acusado, al prestar declaración en juicio reconoció que él estaba vendiendo droga en su domicilio hacía unos seis meses.

2.- Respecto del delito de cultivo de cannabis destinada al consumo.

Que, en cuanto a la calificación jurídica de los hechos ya acreditados en esta parte, se tiene presente que el artículo 8 de la ley 20.000 establece “E/

que, careciendo de la debida autorización, siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, caso en el cual sólo se aplicarán las sanciones de los artículos 50 y siguientes”.

Así las cosas, los hechos acreditados, configuran un delito de cultivo de especies vegetales del género cannabis destinada al consumo personal, previsto y sancionado como la falta del artículo 50 en la parte final del inciso primero del artículo 8 de la Ley 20.000, toda vez que el acusado Claudio Ponce, mantenía en cultivo cinco plantas de Cannabis sativa de una altura que mediaban entre los 60 y 70 centímetros, en el inmueble de Leonor de la Corte 5363 de Quinta Normal, la que según sus dichos las había plantado para su consumo personal, explicando que él era alcohólico y que con eso controlaba la ansiedad y evitaba seguir consumiendo alcohol. Dado que en las vigilancias realizadas en forma previa a la entrada y registro solo se observó la venta de clorhidrato de cocaína y cocaína base, y habiendo recalificado el fiscal el cultivo para que se sancionara de acuerdo con lo previsto en el artículo 50, lo que permite inferir que al igual que estos sentenciadores y la defensa, ha entendido que no hay elementos para considerar que esa droga haya estado destinada también al tráfico.

Así entonces, a juicio de este tribunal, se ha justificado que tanto la yerba seca como las cinco especies vegetales decomisadas estaban destinadas a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, atendida la escasa cantidad total de la droga decomisada y al hecho de encontrarse las plantas aun sin floración según lo afirmado en juicio por el testigo Cristian Mora.

Sobre el iter criminis, se estima por el tribunal que el ilícito fue consumado, pues se dieron todos los elementos del respectivo tipo penal desde el momento que, conforme a la prueba de cargo analizada precedentemente, aunada a los dichos del acusado Mora, quedó acreditado que, mantuvo una plantación y cultivó especies vegetales del género Cannabis sativa en el inmueble en la forma y cantidad ya aludidas.

3.- Respecto del delito de tenencia de arma prohibida en que se subsume la tenencia de municiones.

A partir de la prueba expuesta y analizada anteriormente, se acreditó que el acusado tenía en su poder una pistola a fogueo modificada marca Kuzey modelo F92 calibre 9 mm, además de 16 cartuchos que habían sido modificados, encontrándose el arma apta para el disparo y los cartuchos aptos para ser percutidos. Si bien el perito Inostroza manifestó que los cartuchos convencionales y artesanales no eran compatibles con el arma incautada, el mismo señaló que todos habían sido modificados, entendiendo el tribunal que tal modificación era precisamente para hacerlos compatibles, ya que a lo menos 8 de ellos fueron encontrados dentro del respectivo cargador y los que estaban separados eran del mismo calibre que el del arma a fogueo.

Para concluir de esta manera, se ha tenido presente, que la defensa pidió expresamente la subsunción indicada y que el señor fiscal, en su alegato de clausura, manifestó que dejaba a criterio del tribunal subsumir las cantidades de cartuchería encontradas en la utilización del arma.

De esta manera, atendida la coincidencia en los hechos del calibre de las municiones y del arma, se concluyó de forma unánime por este tribunal que, en este caso, la motivación del encartado para la tenencia de los cartuchos se subsume en la que lo llevó a tener el arma de fuego, situación que derivó en la concurrencia de lo que en doctrina se sindicó como un concurso aparente de leyes penales y que lleva a estos jueces a sancionar solo la conducta más gravosa, es decir, el porte de arma de fuego.

Tal como señala el profesor Cury, un concurso aparente de leyes penales se verifica “cuando un hecho parece satisfacer las exigencias de dos o más tipos diversos, pero, en definitiva, solo será regulado por uno de ellos, en tanto los demás resultarán desplazados por causas lógicas o valorativas”. En este sentido, dicha encrucijada jurídica se resuelve a través de la aplicación del principio de consunción o subsunción, conforme al cual “hay también concurso aparente de leyes penales, y no concurso ideal de delitos, cuando el hecho parece ser captados por dos o más tipos, pero como el disvalor delictivo que implica la ejecución de uno de ellos contiene al que supone la realización del

otro u otros, aquél consume o absorbe a éstos, desplazándolos”. Por lo anterior, en el caso en comento, el disvalor del delito de porte ilegal de municiones aparece subsumido por el delito de porte de arma de fuego, pues éste último absorbe el disvalor o la reprobación jurídica del primero, por lo que, tal como se comunicó en el veredicto, sólo se sancionará al acusado por este tipo penal.

DECIMO. Participación del acusado.

La participación del acusado se encuentra acreditada con la prueba ya valorada correspondiente a los testigos Nieto y Mora, quienes sindicaron al acusado Claudio Ponce Palominos, como el sujeto que fue detenido luego de que en su domicilio se hubiera encontrado droga y armas.

Lo anterior, se ve refrendado con la declaración del propio acusado que reconoció en audiencia que una vecina de nombre Marisol le había entregado una bolsa con ropa y una pistola adentro, la que él guardó, agregando que él sabía que estaba cometiendo un delito y que esa bolsa la había puesto en un bolso donde él tenía sus cosas, pesa y drogas. También reconoció que él compraba droga cada dos semanas, la que paqueteaba en paquetitos de 0,5 gramos y que le habían incautado pasta base y cocaína los que vendía en \$1.000 y los de coca en 3 por 5.000 y uno a \$2.000. También admitió que en su casa había plantas de marihuana que él plantó para fumarla porque él era alcohólico y con eso controlaba la ansiedad y fue parando.

Antecedentes todos que, a juicio del Tribunal, son suficientes para dar por acreditada la participación del acusado como autor ejecutor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, tenencia ilegal de arma de fuego prohibida en que se ha subsumido la tenencia de municiones y cultivo de cannabis para el consumo personal, motivos por los cuales se dictará sentencia condenatoria a su respecto.

Respecto al grado de participación que le corresponde al acusado en cada uno de tales ilícitos ha de tenerse en cuenta que es autor ejecutor por haber intervenido en su ejecución de una manera inmediata y directa, de conformidad al artículo 15 N°1 del Código Penal.

UNDÉCIMO: Audiencia de determinación de pena.

Habiéndose abierto debate sobre determinación de pena, el Ministerio Público, negó la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal, invocando el

extracto de filiación y antecedentes del acusado emitido el 3 de diciembre del 2024, en que registra una condena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo con remisión condicional del año 1990 impuesta por el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, por el delito de hurto. Además, el 17 de julio del 2007 fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio, con reclusión nocturna y multa de 10 UTM por el 36 juzgado del crimen de Santiago, por una infracción a la ley 20.000. La condena más reciente data del año 2015, en que fue condenado a una multa de una unidad tributaria por la falta del artículo 50 de la ley 20.000. Para efectos de la forma de cumplimiento de la pena, invocó el artículo 62 de la ley 20.000, por estimar que resulta aplicable.

En definitiva, teniendo en consideración la concurrencia de la atenuante del artículo 11 N 9, pidió las siguientes penas: Por el tráfico, 5 años y un día y multa de 100 UTM; por el delito de tenencia arma de fuego prohibida, 5 años y un día; y, por la falta del artículo 50 en relación con el artículo 8º, una multa de una UTM. En todos los casos, con el comiso.

Por su parte, la defensa teniendo a la vista un certificado de antecedentes, que se emitió con fecha 16 de agosto del año 2024 por el registro civil en que no registra anotaciones, no habiendo exhibido el fiscal el que había invocado, entiende que su representado sí gozaría de irreprochable conducta anterior.

Pidió también que se reconozca la atenuante del artículo 11 N° 9, por haber renunciado a su derecho a guardar silencio, lo que entiende que es un asunto no controvertido por el Ministerio Público.

En caso de acoger dicha tesis, en cuanto al delito de tráfico ilícito de estupefacientes, pidió se rebaje la pena en dos grados y llegar a una pena de 541 días. En cuanto a la pena de porte ilegal de armas y municiones, se imponga en el mínimo que establece la ley, teniendo en consideración el marco penal rígido que son 3 años y un día, las que pidió sustituir por una libertad vigilada intensiva, invocando un peritaje psicosocial practicado a su representado, cuyas conclusiones reprodujo.

Para el caso que se niegue lugar a su petición principal, pidió que se califique la atenuante del artículo 11 N° 9, y se rebaje la pena por el delito de tráfico a tres años y un día. La del porte ilegal de armas no puede bajar de los tres años y un día.

Por último, invocando razones de justicia material, solicitó se le conceda a su representado la pena sustitutiva pedida, ya que había un acuerdo con el Ministerio Público para terminar esta causa en un procedimiento abreviado el que no logró concretarse porque la autorización del fiscal regional no llegó a la audiencia de preparación de juicio oral, situación por la cual el tribunal obligó a preparar sin dar nueva fecha para poder optar a que llegare esa autorización.

DUODÉCIMO: Modificatorias.

1.- No concurrencia de la Atenuante de irreproachable conducta anterior.

Ante la inconsistencia de los respectivos extractos de filiación y antecedentes invocados por la Fiscalía y la defensa y correspondiendo el esgrimido por esta última a un certificado de antecedentes emitido para fines especiales, concluidas las alegaciones de los intervinientes el tribunal comunicó que obtendría un extracto en la base de datos del registro civil, lo que se hizo el 25/02/2025, el que resultó concordante con las anotaciones hechas valer por la fiscalía.

Así las cosas, habiendo sido condenado anteriormente el acusado Ponce Palominos como autor de delitos de hurto (año 1990), infracción a la ley 20.000 (año 2007) y la falta del artículo 50 de la misma ley (año 2015), carece de irreproachable conducta anterior que lo haga merecedor de la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal.

2.- Atenuante de colaboración sustancial.

Tal como concordaron los intervinientes, a juicio del tribunal, favorece al acusado la atenuante contemplada en el artículo 11 N°9 del Código Penal, puesto que, renunciado a su derecho a guardar silencio, declaró en la audiencia de juicio al inicio de la prueba, reconociendo haber mantenido en su poder tanto las sustancias ilícitas como el armamento habido en su domicilio, entregando antecedentes respecto del lugar en que se abastecía de drogas y de las personas que se las vendería. Además, respecto de las plantas de cannabis, admitió expresamente haber sido él quien las plantó para su consumo.

Tal declaración fue clara, precisa, contundente y contribuyó a dar certeza sobre la decisión de condena arribada en este juicio, permitiendo al ente persecutor liberar parte de la prueba rebajando su carga probatoria, por lo que se considera que hubo un aporte sustancial al esclarecimiento de los hechos.

No obstante, lo anterior, se niega lugar a la petición de la defensa en orden a entender como muy calificada dicha atenuante, ya que, si bien la declaración del acusado se ha estimado sustancial, atendida su detención en situación de flagrancia con motivo de una entrada y registro autorizada judicialmente luego de haberse observado transacciones de droga en su domicilio por el personal policial que efectuaba vigilancias, tal sustancialidad no llega a configurarse como muy calificada.

DÉCIMO TERCERO: Determinación de las penas.

A objeto de determinar la pena a aplicar cabe tener presente, en primer término, que el delito de tráfico ilícito de estupefacientes se sanciona en el artículo 3° en relación al 1° de la Ley 20.000, con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias.

A su vez, el artículo 13 del decreto 400 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.798, sobre control de armas, sanciona la tenencia de armas prohibidas con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y el artículo 17 B de la misma ley, en su inciso segundo, dispone que el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal y, en su lugar, determinará su cuantía dentro de los límites de cada pena señalada por la ley al delito, en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes, y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. En consecuencia, el tribunal no podrá imponer una pena que sea mayor o menor a la señalada por la ley al delito, salvo situaciones que no concurren en este caso.

Respecto del cultivo de cannabis destinado al consumo, el artículo 8 de la ley 20.000 en la parte final del inciso primero, establece que se aplicarán las sanciones de los artículos 50 y siguientes, esto es, alternativamente: a) Multa de una a diez unidades tributarias mensuales, asistencia obligatoria a programas de prevención o tratamiento o rehabilitación; o participación en actividades determinadas a beneficio de la comunidad.

Así las cosas, beneficiándole en cada uno de los ilícitos por los que se le está condenando una circunstancia atenuante y no perjudicándole ninguna agravante, respecto de los ilícitos de la ley 20.000, de acuerdo a lo previsto en el artículo 68 inciso segundo del Código Penal, y artículo 17 B inciso segundo de la Ley de Armas, se aplicarán las respectivas penas en su grado mínimo, teniendo además presente respecto de los primeros al momento de regular su quantum lo previsto en el artículo 69 del mismo cuerpo legal y la cantidad de las sustancias incautadas considerando que se trata del delito de tráfico de drogas y no de microtráfico como lo pedía la defensa.

En cuando a las penas de multa, teniendo presente las mismas circunstancias se aplicarán también en su mínimo, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 52 y que el imputado se encuentra privado de libertad.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 del Código Penal, 45 de la Ley 20.000 y 15 de la Ley de Armas, se ordena el comiso de las sustancias, arma, municiones, dinero y especies incautados con motivo de este procedimiento.

DECIMO CUARTO: Forma de cumplimiento

Atendida la extensión de las penas corporales a imponer, no reuniéndose los requisitos que exige la Ley 18.216, no se concede al sentenciado Claudio Ponce Palominos, ninguna de las penas sustitutivas que contempla dicho cuerpo legal.

Las razones de justicia material que invocó la defensa no pueden ser atendidas para conceder una pena sustitutiva, pues el arribar a un procedimiento abreviado es una mera expectativa que no prosperó y tal expectativa en ningún caso faculta al tribunal oral para imponer penas inferiores a las que resultan de las normas de aplicación de penas ni a conceder penas sustitutivas si no se cumplen los respectivos requisitos legales.

DECIMO QUINTO. Exención de costas.

Atendido lo dispuesto en el artículo 47 inciso tercero del Código Procesal Penal, no se condenará en costas al acusado, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar, toda vez que se le está condenando a penas inferiores que las requeridas por el Ministerio Público.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 7, 11 N°9, 14, 15, 21, 29, 47, 49, 50, 68, 70 del Código Penal; artículos 1, 3,

45 y 52 de la Ley 20.000; artículos 1, 3, 13, 15 y 17B de la Ley de Armas, artículos 1, 4, 45, 46, 47, 52, 295, 296, 297, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 346 y 348 del Código Procesal Penal, se declara:

I.- Que **SE CONDENA** a **CLAUDIO ENRIQUE PONCE PALOMINOS**, ya individualizado, a las siguientes penas:

1.- CINCO AÑOS Y UN DÍA de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 40 **unidades tributarias mensuales**, y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; por su responsabilidad en calidad de autor del delito de **tráfico ilícito de sustancias estupefacientes**, perpetrado en grado de consumado el día **31 de agosto del 2023** en la comuna de Quinta Normal.

2.- TRES AÑOS Y UN DÍA de presidio menor en su grado máximo, y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante la condena por su responsabilidad de autor del delito de **tenencia de arma prohibida en que se ha subsumido la tenencia de municiones**, cometido en grado de desarrollo **consumado** el día 31/08/2023 en la comuna de Quinta Normal.

3.- Una MULTA DE UNA UNIDAD TRIBUTARIA MENSUAL, por su responsabilidad en calidad de **autor** de la **falta de cultivo de cannabis destinada al consumo**, perpetrada en la comuna de Quinta Normal el 31/08/2023 en grado de desarrollo **consumado**.

4.- COMISO de todas las sustancias, arma, municiones, dinero y especies que le fueron incautadas con motivo de este procedimiento.

II.- Que, no reuniéndose los requisitos que exige la Ley 18.216, no se concede al sentenciado Claudio Ponce Palominos, ninguna de las penas sustitutivas que contempla dicho cuerpo legal, debiendo cumplirlas en forma efectiva, para lo cual les servirá de abono el tiempo que ha permanecido privado de libertad con motivo de este procedimiento, según certificado emitido por la Ministro de fe de este tribunal por un total de 554 días contados desde el 01 de septiembre de 2023, en que pasó a control de la detención, oportunidad en la que se decreta la medida cautelar de prisión preventiva en su contra que se ha mantenido vigente ininterrumpidamente hasta el día de hoy, el 07 de marzo de 2025.

III.- Que no se condena en costas al sentenciado.

Cúmplase oportunamente con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal y remítanse copias autorizadas de la sentencia al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para los fines pertinentes.

Dese cumplimiento lo previsto en el artículo 17 de la ley 19.970, en cuanto a la incorporación de la huella genética al Registro de Condenados y cúmplase oportunamente con lo dispuesto en el artículo 17 inciso segundo de la Ley 18.556, modificado por la ley 20.568, oficiándose al Servicio Electoral.

Devuélvase la prueba documental incorporada.

Sentencia redactada por la Magistrada destinada **Antonia Godoy Medina**.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

RIT N 26-2025.

RUC N°2300637190-6

SENTENCIA DICTADA POR LA SALA DEL CUARTO TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO, PRESIDIDA POR EL MAGISTRADO TITULAR CRISTIAN SOTO GALDAMES E INTEGRADA ADEMÁS POR LOS MAGISTRADOS PEDRO ARAVENA BOUYER, TITULAR, Y LA DESTINADA ANTONIA GODOY MEDINA.